

RAMÓN TRUJILLO MORALES

La tragedia neoliberal de Haití

Diez años después de la llegada al poder del primer Gobierno democrático haitiano, mientras los ciudadanos apenas acuden a votar a las urnas y las denuncias de fraude electoral son corrientes, la miseria y el desencanto han frustrado las ilusiones puestas en el proceso de transición haitiano. La clave de lo sucedido se halla en la incompatibilidad de la política económica del primer Gobierno electo con las políticas económicas diseñadas por Washington y las instituciones crediticias internacionales para los países del área caribeña.¹

Louis Kernisan, uno de los planificadores de la invasión de Haití que ordenó la Casa Blanca en septiembre de 1994, explicaba entonces que “(en Haití) se acaba tratando con las mismas familias de antes, las cinco familias que dirigen el país, los militares y la burguesía” porque, añadía Kernisan, “hablan tu lengua, comprenden tu sistema, han sido educados en tu país”.² El oficial se refería a las cinco familias mencionadas en el informe remitido por el congresista estadounidense Walter Fauntroy al presidente George Bush, en marzo de 1989, en el que señalaba a importantes empresarios implicados en la financiación del “terror para intimidar al pueblo haitiano y al sector democrático”. El informe señalaba a las cinco familias aludidas por Kernisan y recomendaba que fueran advertidas, a través de los cauces apropiados, para que cesaran en sus actividades. “Se estima que llevaría un período de diez días ver una reducción de incidentes terroristas y quince días para una detención casi total del aparato terrorista” concluía el congresista.³ Dos de esas familias, las más ricas de Haití, financiaron a los cabilderos de Washington que ayudaron a hacer viable el régimen militar

Ramón Trujillo Morales es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de la Laguna con una tesis sobre los avatares del reciente proceso de transición democrática en Haití

¹ Reseña del libro *Libète: a Haiti anthology*, en *Papeles de Cuestiones Internacionales*, Madrid, primavera de 2001, N° 74, p. 173.

² A. Nairn, “Occupation Haiti: The Eagle Is Landing”, *The Nation*, 1994, 3, 10, p. 348.

³ W. E. Fauntroy, “Haiti’s Economic Barons”, *The Haiti Files. Decoding the Crisis*, ed. J. Ridgeway, Essential Books, Washington D. C., 1994, pp. 35 y 38.

que había iniciado su sangrienta andadura en septiembre de 1991.⁴ Para comprender por qué los sectores más antidemocráticos de Haití se convertirían en los interlocutores privilegiados de quienes restaurarían la democracia en nombre del Gobierno de Clinton y de Naciones Unidas, es necesario considerar la significación del Gobierno democrático de 1991 y su relación conflictiva con el neoliberalismo haitiano.

Ruptura radical

Los siete meses de la presidencia de Jean-Bertrand Aristide representaron una ruptura radical con el pasado: fue el primer Gobierno democrático en la historia de Haití y lo encabezaba un sacerdote muy carismático y comprometido con la mayoría pobre de la población. Con posterioridad, un mensaje enviado por la Embajada de EEUU en Haití al Departamento de Estado, desclasificado en 1994, informaría de “los esfuerzos sorprendentemente exitosos del Gobierno de Aristide [...] rápidamente anulados después del golpe”.⁵ Por el contrario, para la generalidad de los grandes medios informativos, la ineptitud del Ejecutivo democrático era tan evidente que no hubo que argumentarla. Sin embargo, los logros del Gobierno de Aristide en los ámbitos de la seguridad y la economía fueron muy considerables: a lo largo de los siete meses de democracia la violencia se cobró unas ocho vidas al mes frente a un promedio de veinte muertes mensuales durante el anterior Gobierno;⁶ el volumen comprometido de financiación externa para Haití se duplicó; la inflación pasó del 26% al 11%; el PIB creció el 4,9%; aumentaron los ingresos gubernamentales debido a las mejoras en el cobro de impuestos y a la campaña contra la corrupción, y, asimismo, varias empresas públicas dejaron de ocasionar pérdidas y empezaron a producir beneficios.⁷ Son logros muy notables si se considera que el nuevo Gobierno se encontró con una economía que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, se hallaba “en un estado de desintegración sin precedentes”.⁸

Estos éxitos del Gobierno democrático hicieron que su desafío a la ortodoxia neoliberal reinante en la región amenazara con extenderse. Si el país más pobre de América lograba un cierto éxito socioeconómico por su heterodoxia, ¿por qué no iban entonces a aplicar sus recetas económicas sus vecinos dominicanos y demás países latinoamericanos? El Ejecutivo de Aristide hizo que unas empresas

⁴ Sheldon Rampton, “Hustling for the Junta: PR Fights Democracy in Haiti”, *PR Watch*, 3º trimestre de 1994, p. 9.

⁵ N. Chomsky, “Democracy Enhancement, II: Haiti”, *Z Magazine*, julio-agosto de 1994, p. 56.

⁶ Center for International Policy, *Mobilizing Resources for Development. A retrospect on President Aristide's Economic Strategy for Haiti and His Administration Record with Aid Donors*, CIP, Washington, D. C., pp. 1-5; National Labor Committee, *Haiti After the Coup: Sweatshop or Real Development?*, NLC, Nueva York, 1993, p. 36; Economist Intelligence Unit, *Dominican Republic, Haiti, Puerto Rico Country Profile 1999-2000*, Londres, 1999, p. 50; A. Dupuy, *Haiti in the New World Order. The Limits of the Democratic Revolution*, Westview Press, Boulder, 1997, p. 119.

⁷ Citado en National Labor Committee, *op. cit.*, p. 36.

⁸ National Labor Committee, *op. cit.*, p. 26.

públicas deficitarias dieran beneficios, se opuso a las privatizaciones y defendió un aumento del salario mínimo y de las contribuciones a la seguridad social que supondría que los costos laborales diarios por trabajador debían pasar de 2,94 dólares a 4,03 (menos de la undécima parte del salario equivalente en los EEUU). Pero, a pesar de que los salarios vigentes no permitían satisfacer las necesidades básicas de la fuerza laboral haitiana, un informe encargado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU (USAID) explicaba que el futuro del país peligraba debido al “nuevo proyecto de ley de salarios” que “se espera que reduzca la competitividad general de Haití”.⁹ La Agencia afirmaba que el precio de la mano de obra haitiana debía fijarse “en relación a la productividad y no a preocupaciones sociales —los programas de bienestar debieran estar completamente fuera del sistema de salarios para no distorsionar los costos laborales al alza, creando un incremento en los costos laborales por unidad en las exportaciones y la reducción concomitante en las posiciones competitivas mundiales—”. “Si el clima de inversión puede ser devuelto al que existió” durante los Gobiernos militares previos, “o mejorado más que entonces, y la actitud negativa hacia Haití adecuadamente contestada, Haití puede experimentar un crecimiento significativo”.¹⁰

El problema consistía en que, como había señalado el Departamento de Trabajo estadounidense en 1982, el “abundante suministro de mano de obra es uno de los principales atractivos de Haití para los inversores extranjeros”.¹¹ Para aprovecharlo, el país caribeño debía promover sus exportaciones industriales y las importaciones de alimentos; reducir la actividad agrícola destinada al mercado nacional y los aranceles y, además, acabar con los controles de precios. Esta mayor integración en la economía mundial implicaba perpetuar la miseria de su fuerza laboral y haría crecer la dependencia alimentaria del exterior —en 1970 Haití importaba el 10% de sus alimentos; once años después el 23%; y para 1993, el 42%—. ¹² Esto provocaría resistencias en un país que, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), tenía condiciones para lograr la autosuficiencia alimentaria¹³ y que quizá no estuviera interesado en un tipo de exportaciones industriales de escaso valor añadido, que simplemente desplazaban a Haití las etapas intensivas en mano de obra de ciertas cadenas productivas estadounidenses. Es bien sabido que, por ejemplo, a las exportaciones caribeñas de prendas de vestir (más de la mitad de las exportaciones haitianas de 1989)¹⁴ se añadía menos de las dos quintas partes de su valor final en los países

*Una mayor
integración
en la
economía
mundial
implicaba
perpetuar la
miseria de su
fuerza laboral
y aumentar la
dependencia
alimentaria
del exterior*

⁹ USAID, *Haiti Project Paper. Promotion of Business and Export Project (PROBE)*, Washington D. C., 1991, pp. 36-7 y 6.

¹⁰ National Labor Committee, *op. cit.*, p. 25.

¹¹ *Haiti Info*, 1996, 24, 2.

¹² Gérard Gagnon, “Food Security Issues in Haiti”, *Haiti. The Challenges of Poverty Reduction*, World Bank, Washington D. C., 1998, Vol. 2, WB, p. 34.

¹³ USAID, *op. cit.*, p. 31.

¹⁴ Cecilia Green, “The Asian Connection: The U. S.-Caribbean Apparel Circuit and a New Model of Industrial Relations”, *Latin American Research Review*, 1998, Vol. 33, N° 3, p. 19.

del Caribe. Por ello, refiriéndose a dos disposiciones arancelarias concretas, el Departamento de Comercio estadounidense indicaba, a comienzos de la década de 1990, que “la ropa cortada en los EEUU para ser ensamblada en la cuenca del Caribe” era de hecho “considerada como parte de la producción nacional de ropa de EEUU por el censo de EEUU”.¹⁵ Eran simultáneamente “exportaciones” caribeñas y “producción nacional” estadounidense. En realidad, el modelo exportador promovido por la Casa Blanca en Haití tenía por objeto reducir costos laborales a sus productores y no el desarrollo de la República caribeña. Si la política económica del Gobierno de Aristide hubiera tenido éxito y, a partir de ahí, se hubiera extendido a otros países, habría supuesto un serio revés para la promoción internacional de un modelo exportador basado en los bajos salarios. Sin embargo, un golpe de Estado impediría el posible triunfo de la alternativa haitiana al modelo neoliberal.

¿Promover la democracia?

La historia oficial difundida por los grandes medios informativos da cuenta del golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Aristide e impuso tres años de régimen militar (1991-1994) —bajo el mando del teniente general Raoul Cédras— y, sobre todo, de los esfuerzos de la comunidad internacional para restablecer la democracia en Haití que culminaron con la invasión estadounidense del país caribeño. Tras el golpe de septiembre de 1991, James Baker, el secretario de Estado del Gobierno estadounidense, declaraba que la junta encabezada por Cédras “será tratada como un paria, sin amigos, sin apoyo y sin futuro”,¹⁶ y tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la ONU condenaban al régimen *de facto* y recomendaban la imposición de sanciones comerciales contra Haití. Sin embargo, mientras que, por una parte, el Gobierno de Bush se comprometía públicamente con la restauración de la democracia haitiana, por otra, adoptaba algunas medidas que hacían viable la dictadura de Cédras: el embajador de EEUU pedía que el presidente democrático exiliado regresara en un plazo de seis meses y la sustitución de su primer ministro por uno nuevo. La Casa Blanca pronto se desentendería de las notorias violaciones que iba a sufrir el embargo económico impuesto al país caribeño.¹⁷

En julio de 1993, las negociaciones que debían poner fin al régimen golpista y restablecer la democracia condujeron a un acuerdo entre los representantes del régimen y las autoridades legítimas. Las partes haitianas, presionadas por Clinton, firmaron en Nueva York el Acuerdo de la Isla de los Gobernadores que, en lo

¹⁵ K. Ives, “The Unmaking of a President”, *Nacla Report on the Americas*, enero-febrero de 1994, p. 16.

¹⁶ United Nations. Department of Public Information, *The United States and the Situation in Haiti*, UN, Nueva York, 1995, pp. 1 y 2; Haitian Information Bureau, “Chronology. Events in Haiti, October 15, 1990-May 11, 1994”, *The Haiti Files. Decoding the Crisis*, ed. J. Ridgeway, pp. 209, 210 y 212.

¹⁷ Consejo de Seguridad de NU, *Resolución 841*, 16, 6, 1993. El texto del Acuerdo de la Isla de los Gobernadores se reproduce en Jean-Bertrand Aristide, *Dignidad*, Iepala Editorial, Madrid, 1995, pp. 200-202.

esencial, estipulaba el nombramiento de un nuevo primer ministro y la consiguiente suspensión de las sanciones económicas; una amnistía que perdonara a los militares sus crímenes; el retiro de Cédras y el regreso de Aristide el 30 de octubre de 1993.¹⁸ Sin embargo, el Acuerdo estaba destinado al fracaso porque contemplaba una coexistencia provisional del primer ministro legítimo con los dirigentes golpistas que permitiría a estos últimos socavar el proceso de transición a la democracia. El plazo de cuatro meses previsto para la transición era muy largo y no había mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos durante esa etapa transicional. Como la amnistía prevista en el Acuerdo cubriría los delitos cometidos en el pasado y, en la práctica, los que se cometieran en los cuatro meses siguientes, fue aprovechada por los militares: en mayo hubo nueve asesinatos políticos y en junio cinco; en julio se cometieron 34 asesinatos; 33 en agosto; unos 60 en septiembre y alrededor de 80 en octubre.¹⁹

Esta violencia provocaría el fracaso del Acuerdo y un incidente ocurrido el 11 de octubre de 1993 precipitaría los acontecimientos. Ese día un buque de la Armada estadounidense debía desembarcar a 220 integrantes del personal de la ONU que contribuiría a crear las condiciones de seguridad indispensables para el regreso de Aristide. Pero, como más de cien partidarios armados del Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH) se estaban manifestando contra la presencia extranjera en el muelle de la capital, el buque abandonó el puerto sin haber negociado la seguridad del desembarco y, a partir de ahí, se produciría la retirada de la presencia internacional en Haití y el restablecimiento de las sanciones.

La Embajada de EEUU y el Departamento de Estado describieron al FRAPH como una "organización paramilitar ilegítima"²⁰ y Vicki Huddleston, la segunda responsable de la misión diplomática estadounidense en Haití, declaró que "fue creado por los militares y la policía".²¹ El FRAPH fue un destacado responsable del terrorismo estatal durante el último año del régimen de Cédras. Pero lo que no encaja con los supuestos objetivos democratizadores de la política haitiana de la Casa Blanca es precisamente el hecho, reconocido por el secretario de Estado, Warren Christopher,²² de que Emmanuel Constant, el líder del FRAPH, era un agente pagado por la CIA. Washington apoyaba a quienes combatían los objetivos políticos que defendía en público y, concretamente, se sirvió de la manifestación

¹⁸ Human Rights Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees, *Terror Prevails in Haiti. Human Rights Violations and Failed Diplomacy*, HRW/A, NCHR, Washington D. C., 1994, p. 6.

¹⁹ United States District Court Eastern District of New York, *Belance v. FRAPH: Plaintiff's Memo in Support of Motion for Default Judgement*, http://diana.law.yale.edu/diana/db/2619_defj.html, p. 10.

²⁰ CBS News Transcripts, *Nightmare in Haiti; Haiti Now Run by the Military and Death Squads While the US Looks On, Doing Nothing*, CBS, 1994, 17, 4, p. 4.

²¹ CBS News Transcripts, *Toto Constant; FRAPH Leader Toto Constant Worked With the CIA Against President Clinton's Orders When the US Military Was in Haiti*, CBS, 1995, 3, 12, p. 5.

²² Human Rights Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees, *op.cit.*, p. 37.

La Casa Blanca había saboteado sus propias sanciones y eso no encajaba con el objetivo prioritario de Washington que era restablecer la democracia en Haití

del FRAPH contra la presencia del buque estadounidense para hacer fracasar el Acuerdo de la Isla de los Gobernadores. Incluso el enviado especial de los secretarios generales de la ONU y la OEA declararían que la manifestación fue utilizada como "excusa para la retirada".²³

Significado de las sanciones

Sin embargo, los medios de comunicación siguieron tan convencidos de que la Casa Blanca se proponía restaurar la democracia haitiana que llegaron a ocultar hechos que cuestionaban ese dogma de fe. Los periodistas no encontraron inconveniente alguno en informar sobre las continuas violaciones que sufrían los sucesivos embargos económicos adoptados contra Haití porque eran atribuidos a la ineficacia o a cualquier otra causa que no implicara mala fe. El propio subsecretario de Estado, Strobe Talbott, diría en junio de 1994 que "hasta ahora, a causa de la naturaleza negligente de la aplicación de las sanciones, una enorme porción de la clase dirigente haitiana no sólo podía vivir con el embargo sino que, perversamente, muchos se estaban beneficiando de él".²⁴ Si se descubría que Washington aceptaba deliberadamente las violaciones del embargo ya no podría afirmarse que deseaba que las sanciones provocaran la caída del régimen militar. Cuando empezó la invasión de Haití, la agencia de noticias *Associated Press* informó que el Ejecutivo de Bush había presionado a la agencia gubernamental estadounidense encargada de la aplicación de las sanciones para que no castigara a la compañía Texaco por haber violado 160 veces el embargo impuesto a la República caribeña.²⁵ Esta información mostraba que la Casa Blanca había saboteado sus propias sanciones y eso no encajaba con la afirmación de que el objetivo prioritario de Washington era restablecer la democracia en Haití. La información fue difundida por *Associated Press* y *Agence France Press* cuando la atención informativa internacional estaba centrada en la invasión de Haití, y fue completamente silenciada por los medios informativos porque no se ajustaba a su versión de los acontecimientos. Las sanciones sirvieron para fingir acatamiento a la legalidad internacional: primero fracasaba el embargo y, por tal motivo, después se invadía Haití y así se evitaba que las sanciones provocaran la huida de Cédras y un vacío de poder que pudieran ocupar los demócratas haitianos sin supervisión del cuerpo de marines.

Triunfa la estabilidad

La invasión permitió el retorno de un presidente legítimo cuyo margen de acción quedaba doblemente reducido, en primer lugar, a causa del desastre socioeconómico.

²³ *Time*, 1994, 27, 6.

²⁴ *Associated Press*, 1994, 19, 9; 20, 9; 29, 9; y 1, 10; *Agence France Press*, 1994, 20, 9; Alexander Cockburn, "Saving Haiti", *The Nation*, 1994, 10, 10.

²⁵ Inter-American Development Bank, *Emergency Economic Recovery Program. Haiti*, 1995, p. 3; Elizabeth D. Gibbons, *Sanctions in Haiti. Human Rights and Democracy Under Assault*, Praeger Publishers, Westport, 1999, p. 95.

mico legado por los tres años de dictadura —descenso de PIB en un 30%; aumento del 50% en la tasa de desempleo; duplicación de la desnutrición infantil, del número de niños abandonados en la calle y crecimiento de la tasa de mortalidad materna en un 29%—. ²⁶ Esta situación acrecentaría la dependencia de la financiación externa y de las exigencias económicas foráneas. En segundo lugar, el legado de las alrededor de cinco mil personas asesinadas por la represión militar ²⁷ dejaría al movimiento democrático relativamente desvertebrado y atemorizado. De este modo, mientras que Cédras había frustrado la experiencia democrática de 1991 e impedido que pudiera reproducirse en un futuro cercano, la Casa Blanca se encontraba ahora con el Gobierno de Aristide reducido a la impotencia y, simultáneamente, se apuntaba un tanto propagandístico como promotora internacional de la democracia.

Mientras que, por una parte, las cinco familias de Kernisan y la reducida élite haitiana eran las beneficiarias de la democracia repuesta por Washington, por otra, Aristide percibía la necesidad de “democratizar la democracia”. ²⁸ Un informe de la misión militar de la ONU en Haití, fechado en septiembre de 1995, afirmaba que “la política de reconciliación de Aristide ha animado a la élite económica” a “hacer tratos con el Gobierno” haitiano legítimo y, “como resultado, el interés de la élite económica en la estabilidad y los beneficios continuos está siendo satisfecho”. Al mismo tiempo, se advertía que la creciente presión ejercida por la ciudadanía para que se aplicaran “políticas económicas populistas” podría trastornar “el pacífico equilibrio (...) logrado hasta la fecha”. ²⁹ Las políticas que beneficiaban a la élite proporcionaban la deseada estabilidad; las que beneficiaban a la inmensa mayoría pobre ocasionaban la indeseada inestabilidad que podía hacer peligrar una situación en la que el 4% de la ciudadanía acaparaba el 64% de la riqueza nacional. ³⁰ La estabilidad significaba que el país debía mantener la competitividad de su fuerza laboral, de modo que, para 1995, según el FMI, los salarios haitianos se habían reducido al 27,6% de su valor de 1981. ³¹ Un año antes, con el salario mínimo en torno a un dólar diario, Brian Atwood, director de USAID, declaraba que “no creo que esta economía esté lista para considerar” ³² una subida del salario mínimo. Por último, si en las elecciones presidenciales de 1990 había participado el 80% de los electores, en las de 1995 la participación se redujo al 28% del

²⁶ Organization of American States. Inter-American Commission on Human Rights, *Report on the Situation of Human Rights in Haiti*, OAS, Washington D. C., 1995, p. 34.

²⁷ Jean-Bertrand Aristide, “La democracia empobrecida”, *El Mundo*, 15, 10, 1996.

²⁸ Laurie Richardson, “Disarmament Derailed”, *NACLA Report on the Americas*, mayo-junio de 1996, p. 14.

²⁹ *El País*, 5, 12, 1999.

³⁰ Economist Intelligence Unit, *op.cit.*, p. 50.

³¹ *Haiti Info*, 1994, 22, 10.

³² Pamela Constable, “A Fresh Start for Haiti?”, *Current History*, febrero de 1996, pp. 68-9; *NACLA Report on the Americas*, enero-febrero de 2001, pp. 1, 2 y 6; *Informe Latinoamericano*, Londres, 17, 10, 2000 y 5, 12, 2000.

electorado. Si en esas dos convocatorias hubo observadores internacionales que garantizaron la limpieza de los comicios, ya no ocurriría lo mismo con las elecciones presidenciales de 2000, que estuvieron acompañadas de acusaciones de fraude y de discrepancias sobre el nivel de participación que oscilaba entre menos del 20% y el 60%.³³ Al concluir los dos decenios finales del siglo XX, parecía estar claro que en Haití se había sacrificado el proceso de transición democrática a la imposición de políticas económicas neoliberales. El término democracia ha quedado como una etiqueta legitimadora del papel jugado por la comunidad internacional en ese país.